

“Avance transnacional de la gran minería y la resistencia en el territorio.”.

Javier Fernando Villamil Velásquez.

Cita:

Javier Fernando Villamil Velásquez (2011). *“Avance transnacional de la gran minería y la resistencia en el territorio.”. IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-034/664>

Título de la ponencia:

Avance transnacional de la gran minería y la resistencia en el territorio.

Nombre del Autor: Javier Villamil Velásquez

Pertenencia institucional: Doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Plata.

Dirección de correo electrónico: jafevive@gmail.com

Resumen:

Aunque la lógica básica de las transnacionales al emprender proyectos mineros es la misma y se aplica un modelo extractivo más o menos homogéneo a nivel global, la resistencia social adquiere matices y variantes diversas de acuerdo al contexto histórico regional y nacional de cada país. Este trabajo hará un paneo general de la situación en la región, pero se enfatizará en el caso colombiano y argentino, para mostrar comparativamente las aristas que puede llegar a tomar el fenómeno de resistencia social, ya que se viene consolidando un movimiento nacional anti minero en cada uno de estos países.

El trabajo tratará aspectos fundamentales, como el modelo de extracción implementado en Suramérica y en los países mencionados (Colombia y Argentina), las estrategias aplicadas por las empresas transnacionales para la apropiación de territorios, la organización social que se ha desarrollado en estos países en torno a la problemática y la lucha que se ha sostenido en casos concretos entre transnacionales y comunidades locales por el control del territorio.

Palabras clave: Resistencia social, organización social, territorio, transnacionales y modelo extractivo.

AVANCE TRANSNACIONAL DE LA GRAN MINERIA Y LA RESISTENCIA EN EL TERRITORIO.

Contexto de la problemática

Hoy en día, se experimenta un aumento en el ritmo exploratorio y de extracción de recursos a nivel mundial que presiona a territorios ricos en petróleo, gas, carbón y un sin número de minerales. Varios teóricos y activistas reconocen un significativo aumento en cuanto a la exploración y explotación de recursos naturales a nivel mundial, lo que implica un respectivo incremento en los niveles de extracción. Y en ese sentido, la explotación minera (y petrolera) no es la excepción. Es así como varios autores se han percatado del vertiginoso ascenso de la extracción mineral en países del “tercer mundo”, adelantado por parte de grandes empresas del sector¹.

Actualmente, en la región suramericana, hay una ampliación de la frontera extractiva de materias primas, donde se resalta especialmente la implantación

de megaproyectos de minería a cielo abierto. Esa expansión del modelo minero hace que los grandes intereses económicos, se sobrepongan a diferentes territorios, ecosistemas, culturas y pueblos del continente. Muchas regiones se están volcando en torno a la implementación de grandes complejos mineros, generando un sin número de interrogantes sobre las repercusiones que ello pueda traer.

La llegada masiva de empresas de todos los calibres al sur continente va acompañada de cambios estructurales, todo esto ha requerido de una política estatal (y mundial), que ha hecho volcar las economías del sur hacia un modelo primario exportador, lo que implica concentrar gran parte de los esfuerzos de varias naciones “subdesarrolladas” en la extracción de materias primas. Para el Centro de Investigación (2008), “los países de América Latina continúan teniendo el rol de abastecedor de materias primas, obtenidas a través de un modelo extractivo”².

Por lo tanto, se asiste a un proceso de reconquista espacial de las grandes corporaciones transnacionales de la minería en Suramérica, para lo cual los grandes actores de la economía están utilizando una serie de estrategias para lograr acceder a los recursos (bienes naturales), que resultan claves dentro de la economía internacional.

Minerales como el oro, el carbón, el cobre, la plata, entre otros, se han vuelto los más apetecidos por el capital transnacional y en base a ello se ha consolidado todo un programa (jurídico, ideológico o de seguridad), tendiente a facilitar el ingreso de estos grandes agentes de la economía global, a los espacios locales que les resultan de interés. Sin embargo, muchas comunidades han respondido ante semejantes niveles de agresión y se han organizado socialmente para enfrentar el modelo de extracción a gran escala que se ha venido imponiendo.

En el caso la nación Argentina, también se ha visto crecer vertiginosamente el sector de la minería, siendo el oro, la plata y el cobre, los principales minerales a extraer. Allí, el Estado ha sido generoso promoviendo la gran minería en el territorio nacional, donde se resaltan proyectos de gran envergadura como Bajo Alumbraera, Veladero, Mina Aguilar, Cerro Vanguardia, entre otros, donde se han instaurado empresas líderes en esta rama a nivel mundial.

Entre todos estos, también se destaca el proyecto Pascua Lama a cargo de la compañía Barrick Gold, tendiente a desarrollar minería mediante una acuerdo binacional entre Chile y Argentina, lo que ha conllevado a un sin número de pronunciamientos por las posibles consecuencias sociales y ambientales que esta iniciativa podría acarrear.

En Colombia, la situación no es mejor, diversas empresas extranjeras han promovido una oleada de concesiones mineras en una gran parte del país, sumando más contradicciones a la extracción desmedida que ya han adelantado empresas mineras en el país. El proyecto carbonífero del Cerrejón (una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo) y la extracción de níquel de Cerromatoso, representan las operaciones mineras vigentes que

causan mayor impacto a nivel local. Sin embargo, se aproximan nuevos proyectos mineros que se han venido perfilando en el escenario colombiano como el Proyecto de oro la Colosa, el proyecto Angostura o Parque Minero Industrial en Bogotá, así como los avances transnacionales propuestos para la zona del Sur de Bolívar.

Pero quizás el caso más paradigmático en este país, el lo acontecido con la empresa AngloGold Ashanti, transnacional que ha volcado fuertes intereses en el territorio colombiano y que ha solicitado miles de hectáreas en exploración, logrando una fuerte alianza con las fuerzas de seguridad del Estado, así como con su clase política tradicional.

Movimientos sociales frente al modelo extractivo minero

Consecuentemente, uno de los ejes neurálgicos por el cual se generan tantos cuestionamientos hacia las transnacionales de la minería y sus respectivos megaproyectos extractivos, se concentra en los impactos locales que este tipo de explotación lleva consigo, donde los reclamos sociales más sentidos, pasan por los graves daños ambientales, el desplazamiento de población o la pérdida del territorio.

Otro componente de suma importancia resaltado permanentemente dentro de esta visión, es el papel de los movimientos sociales, cuya característica común para este caso, es la oposición a los megaproyectos mineros. Para Rodríguez Pardo, luego del rápido avance de las empresas sobre varios territorios, “la respuesta popular no se hizo esperar. Las comunidades resisten y reclaman la expulsión de sus territorios de estas prácticas mineras”³, haciendo alusión al caso argentino.

Si bien, hay poblaciones que no generan mayor resistencia o son pasivas frente al fenómeno, hay otras que han manifestado su inconformismo al respecto, poniendo en cuestión la presencia de las grandes inversiones extranjeras y criticando la implantación de los emprendimientos mineros. En ese sentido, se han desarrollado toda una serie de conflictos en Latinoamérica, en donde en ciertas ocasiones, las comunidades logran dar marcha atrás al megaproyecto transnacional.

En Argentina, durante la última década, se generaron una serie de movimientos sociales que se han manifestado en contra de este modelo minero a gran escala. En este camino, la obra de Svampa y Antonelli (2009) a través de todos sus autores, el texto de Wagner y el del Centro de Investigación, son ricos en retomar los movimientos sociales surgidos en las provincias de Catamarca, Chubut, Sta Cruz, La Rioja, Mendoza y San Juan en Argentina, en referencia a las confrontaciones sociales que han surgido en contra del modelo extractivo transnacional.

Precisamente la UAC (Unión de Asambleas de Autoconvocados), es la organización social que ha liderado ese proceso de resistencia social en el país, siendo un espacio donde convergen decenas de organizaciones regionales, que también se han manifestado en contra de esta forma de

explotación. Se resalta el surgimiento y desarrollo de la UAC, como proceso emblemático de organización anti megaminería en Argentina. Sintetizando sus planteamientos en este punto, la UAC surge como un espacio de encuentro de varias asambleas ciudadanas de diferentes provincias afectadas o potencialmente afectadas por la gran minería, donde terminan articulándose estas resistencias.

Se podría decir, que todo comenzó en el año 2002 en la ciudad patagónica de Esquel, donde se generó un proceso colectivo de pobladores de esta ciudad (y sus inmediaciones), en el cual se ejerció todo tipo de acciones para evitar la implantación del proyecto minero aurífero denominado "Cordón Esquel", a cargo de la empresa Meridian Gold (hoy Yamana Gold). El proceso de resistencia culmina con una consulta popular, que arrojó un rotundo no y desembocó después en la primera ley provincial de prohibición de éste tipo de minería. Desde aquel entonces las resistencias se han multiplicado (Svampa, 2009).

Este movimiento social naciente sirvió de ejemplo a más provincias involucradas en la problemática, en lo que se conoció como el "efecto Esquel". Junto con un proceso similar que había surgido anteriormente en Catamarca por los afectados del proyecto minero Bajo Alumbrera, se fortaleció a diferentes organizaciones que se unían por una misma causa y finalmente, se establece la UAC en la ciudad de Córdoba en el 2006, fruto de la proliferación y evolución de las protestas en diversas regiones del país.

Actualmente, este es un espacio que aglutina más de 70 asambleas de base y ha efectuado 13 encuentros nacionales de discusión en diferentes puntos del país, con miras a proyectar, sistematizar y debatir el trabajo a nivel nacional. Las acciones que emplea se combinan entre la acción directa (bloqueos, marchas,..), con acciones legales-institucionales encaminadas a la promulgación de leyes anti minería.

Es de señalar, a propósito, que este movimiento ha logrado que se dicten leyes que restringen la actividad minera (en algún grado) en 8 provincias del país. Aunque en cuanto a sus acciones de resistencia, uno de sus fuertes son las campañas de concientización, formación y acompañamiento que realizan en diferentes partes del país.

Y aunque en la UAC no se limitan sólo a discusión de temas mineros, sino que acoge también a afectados por el negocio turístico, por la deforestación, por la implantación de represas, por el modelo sojero, entre otros, es notable su tendencia articuladora hacia la problemática ambiental (principalmente en el sector minero), como centro de la discusión y el reclamo colectivo. Pese a las reales dificultades internas, la UAC se ha convertido en un espacio de intercambio y nacionalización experiencias y, por ende, de ampliación de las demandas (Svampa, 2009).

Lo interesante en ese sentido, es la trascendental agrupación de movimientos de origen campesino, indígena, barrial, estudiantil, intelectuales y diferentes clases de militantes, concentrados en torno a este movimiento. Pero para lograr

esta convergencia, según Svampa (2009), jugaron tres factores a favor, “movilización multisectorial, la socialización de la información y la construcción de redes territoriales”.

De otra parte y haciendo un brusco salto espacial, en Colombia surgió en el 2006 el TPP (Tribunal Permanente de los Pueblos), constituyéndose como el evento de denuncia y análisis colectivo hacia las transnacionales de más trascendencia en la historia reciente del país. Allí participaron organizaciones sociales afectadas, así como surgieron y se consolidaron grupos de investigación en torno a la gran minería.

En Colombia se ha venido haciendo un ejercicio de consolidación de diferentes grupos de trabajo regionales, básicamente en donde se presentan las mayores contradicciones entre las comunidades y las transnacionales en la disputa territorial. Así se ha conformado todo un movimiento de resistencia contra los megaproyectos mineros y petroleros en regiones como Arauca, Casanare, Sur de Bolívar, Centro del Tolima, Noroccidente antioqueño, Santander, Cauca, el Sur de Bogotá o la zona carbonífera de Guajira y Cesar. Estas organizaciones han dejado de estar luchando aisladamente y eventualmente tienden puentes de solidaridad y apoyo.

Actualmente, la Red Nacional contra la Gran Minería, es una de las tantas instancias que aglutina a organizaciones que se oponen al modelo extractivo a gran escala. Organizaciones como Fedeagromisbol, han liderado desde el Sur de Bolívar, toda una campaña que parte desde su región (afectada por la intromisión transnacional) y se expande hacia otras regiones impactadas o potencialmente ambicionadas por la gran minería.

Justamente, el Sur de Bolívar ha sido una de las zonas más convulsionadas por el enfrentamiento entre transnacionales con comunidades locales. Los múltiples intentos de las multinacionales (Corona Gold Fields y Anglogold Ashanti) por el aprovechamiento de estos depósitos regionales han sido fallidos, en gran parte, porque el recurso oro y las tierras aledañas a los yacimientos, ya han sido apropiados hace mucho por las comunidades que viven allí y estas han dispuesto toda una organización para la defensa de su territorio.

Y aunque las empresas han realizado estudios de la zona y todo tipo de maniobras para acaparar estos territorios, en el cual la estrategia militar-paramilitar ha estado dentro de su abanico de acción, formalmente no ha logrado la posesión definitiva sobre los recursos y las tierras de la zona, por lo que todavía se vive una dura dinámica de disputa por los recursos y el territorio del Sur de Bolívar. La organización social en dicha región, ha sido uno de los ejemplos más notorios en cuanto al rechazo del accionar de una empresa extranjera en territorio colombiano.

Estas rebeliones populares surgen en Colombia especialmente porque comunidades campesinas e indígenas ven amenazada su posesión de la tierra, así como los pequeños mineros son presionados constantemente a abandonar sus pequeñas extracciones de mineral, para que queden los yacimientos a

disposición del gran empresario. Ahora, una de las consignas centrales en Colombia, es la lucha por la permanencia en el territorio.

Pero esta resistencia local, no sería posible sin el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que también se han comprometido con esta causa. El Observatorio de Transnacionales (2008) señala como la organización social en la escala nacional, no sólo se ha plegado en torno a la causa anti minería, sino también se ha cohesionado alrededor de la oposición general a todo el modelo transnacional, por parte de las poblaciones y grupos sociales afectados⁴.

Justamente, se puede leer a través de algunos autores, como se han establecidos redes y lasos comunicantes entre los movimientos y/o resistencias sociales en la escala nacional e internacional en el tema minero (y transnacional en general), dado que es una problemática que al unísono se está desarrollando a lo largo del todo el hemisferio. De esta forma, las organizaciones gestadas en Argentina y Colombia a través de éste proceso, ya han tenido vinculación con comunidades afectadas por la minería en el Perú y estos a vez con líderes de Chile, Guatemala, y Ecuador.

Otras experiencias de resistencia frente a las transnacionales

En Perú son múltiples las manifestaciones sociales contra las empresas mineras, principalmente por los trabajos de las minas Yanacocha, Tintaya y Antamina. Desde los años treinta, cuando las comunidades emprendieron una lucha contra las compañía Cerro de Pasco Copper Corporation, se ha desatado una riña constante entre las poblaciones de la Sierra o la Amazonía peruana, convocándose a huelgas o cierre de carreteras, más sin embargo, la respuesta institucional ha sido menos amigable, con altos índices de represión por parte de las fuerzas armadas del Estado y las empresas mismas.

Las amenazas de muerte, asesinatos, golpizas y pérdida del territorio, donde se ven implicada nuevamente empresas como Barrick Gold⁵, ha desatado una fuerte inconformidad entre ciertos grupos sociales peruanos, llegándose a consolidar movimientos nacionales y regionales en contra de esta actividad, como sucede con la conformación de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI)⁶ y la realización de encuentros nacionales para evidenciar los efectos de esta actividad.

Hasta el mismo alcalde de la ciudad peruana de Huaraz x y su comunidad en la zona de la Sierra, han liderado una lucha contra estas empresas, señalando entre otras que: "*¡Hemos tomado la decisión de luchar por los pueblos de Áncash!*"(...). *Estamos enfrentando a las dos empresas mineras, principalmente, porque hay otros yacimientos mineros, como el de Huallanca, donde la gente se está quejando por la muerte de numerosos animales y la contaminación de la agricultura. ¡Que paguen sus regalías, porque se llevan el oro, el cobre y otros minerales valiosos en grandes toneladas!*"⁷.

La resistencia se ha observado frente a otras empresas como Monterrico Metals o BHP –Billinton y ha conducido a la expulsión de la empresa Barrick de

de la jurisdicción de la comunidad de Huambo en la Sierra. Es de resaltar también el caso del proyecto Tambo Grande emprendido por la empresa Canadiense Manhattan Minerals en el Perú, que fue rechazado finalmente por los habitantes de la región de Piura.

De manera similar, en la región de Zipacapa en Guatemala, las comunidades tomaron acciones que alejaron de la zona a la empresa minera Glamis Gold. Fueron casos de resistencia relativamente efectivas contra ese modelo extractivo, que sirvieron de punto de referencia a más organizaciones a nivel nacional e internacional. En Guatemala es llamativa la oposición que ha surgido contra empresas como Glamis Gold Ltda., que ejecuta el proyecto minero Marlin (departamento de San Marcos).

Aunque el proyecto cuenta con el total apoyo del Banco Mundial y el gobierno de este país, en el año 2005 las protestas y bloqueos no se hicieron esperar, a pesar del saldo de heridos y muertos que ha traído la confrontación. Los reclamos surgen al manifestarse masivamente contra las medidas impositivas de las autoridades, la falta de consulta con las poblaciones rurales, la pérdida de territorios indígenas y atropello de las comunidades. Más aún, se han efectuado consultas populares donde las comunidades de varios municipios han expresado el rotundo rechazo a la empresa, existiendo la posibilidad de revocatoria de la concesión.

En Ecuador, la compañía Mitsubishi fue derrotada por una organización local en la provincia de Imbabura, cuando se quería imponer una mina a cielo abierto reubicando familias y trayendo mineros para explotar una reserva de cobre (Martínez, 2004). En noviembre de 1998, la población del Estado de Montana de Estados Unidos rechazó la minería a cielo abierto y a partir del siguiente año la actividad quedó totalmente prohibida⁸.

Hasta comunidades indígenas Inui en Québec Canadá, han mostrado su total descontento por la explotación de diamantes a cargo de la empresa Falconbrigde (que hoy hace parte de Xstrata), que repercute seriamente en la pérdida del territorio y los ecosistemas aledaños, por lo cual han emprendido campañas internacionales para visibilizar su causa.

Reflexionando sobre los movimientos sociales anti mineros

Existen una serie de particularidades teóricas y conceptuales que se pueden abstraer a cerca del tratamiento que se realiza a los movimientos sociales de este tipo, ya sea por las características especiales que ha requerido su análisis, por los elementos que se resaltan en el debate, por la corrientes de pensamiento que han influido en esta visión y por los paradigmas que de otras latitudes han sido acogidos o no dentro de esta perspectiva. En el caso de los movimientos sociales anti mega minería se destacan algunos componentes, como se tratará a continuación.

Para comenzar se resalta el “territorio” como elemento central del análisis. Como lo denota De Echave y otros (2009), se han desatado importantes conflictos entre la trasnacionales y las comunidades en la disputa por el

territorio⁹. Justamente, el territorio se constituye como un espacio de apropiación cultural, económica y política de las comunidades, que entra en confrontación (en este caso) con los intereses que se proyectan desde el exterior.

Es la pérdida del territorio de las comunidades, uno de los impactos más visibles y conflictivos con respecto al avance extractivo de las mineras transnacionales. Como lo enuncia el WMR (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales), “el desplazamiento o traslado de las poblaciones, incluyendo el traslado forzoso, sigue siendo una característica común del desarrollo minero”¹⁰.

Como un fenómeno del presente, se resalta como la misma defensa del “territorio” ha sido centro de la lucha social en años recientes a través del continente para muchas organizaciones, especialmente del ámbito rural con comunidades indígenas y campesinas, entendiendo que para ellos existen amenazas extraterritoriales sobre su espacio local¹¹. De forma similar como lo hace De Echave y otros (2009) para el caso peruano, el WMR señala permanentemente a través de sus autores, como por ejemplo, los territorios indígenas han sido disputados por empresas mineras en un gran número de países, negando los derechos que estos pueblos constantemente reclaman.

Pero Svampa (2009) advierte que desde el Estado y las empresas, el territorio también es tomado en cuenta, pero éste concebido como un espacio a intervenir y mediado por fuertes intereses económicos. Por ello, desde el Estado y sus políticas se concibe a estos espacios como “territorios eficientes, territorios vacíos o territorios desiertos”, según lo enuncia la propia autora, lo que al mismo tiempo tiende a invisibilizar el territorio socialmente construido por las comunidades¹². Como quiera que sea, la llegada y presencia de empresas transnacionales a varias regiones implica necesariamente una “reconfiguración del territorio”.

Otro elemento a destacar, sobre todo en Argentina, es la cuestión ambiental como elemento central dentro de los planteamientos de las comunidades e intelectuales para poner en cuestión la actividad minera. Es tan así este fenómeno dentro de los movimientos sociales, que Svampa junto con Wagner los denomina como “movimientos socio ambientales”, dado que en este país se conjuga la resistencia social con reclamaciones que enfatizan en ese campo.

En esa misma vía, Svampa (2009) y Wagner (2010) se refieren también a los “conflictos socio ambientales”, como una expresión del desencuentro entre empresas y comunidades. Estas autoras se basan en los aportes de Enrique Leff y Martínez Alier para alimentar esta conceptualización, quienes desde la margen teórica ambientalista, han hechos sus aportes frente a la movilización social en el campo ambiental.

En general se puede decir, que las comunidades se revelan teniendo en cuenta otras experiencias y previendo riesgos futuros, o simplemente, por el padecimiento de impactos negativos propios, en los dos casos, ya sea para impedir la implantación transnacional o para reclamar la mesura y/o salida de

estas empresas de sus territorios (luego de un cierto tiempo transcurrido de las operaciones extractivas) Pero si bien, la resistencia social es una fuerza que puede hacer regresivo el avance transnacional sobre algunos territorios, no se puede negar que en el presente estas empresas pueden lograr quebrantar estos movimientos y penetrar en espacios ricos en recursos.

Y es que junto a la ampliación de la frontera de extracción y exploración petrolera, a medida que se acaban los yacimientos mineros más fácilmente accesibles, una profunda ansia de nuevas fuentes de minerales baratas empuja a la industria a una prospección cada vez más intensificada en territorios indígenas y en zonas medioambientalmente sensibles (Nettleton, 2000)¹³.

Esta expansión empresarial ejerce una presión tan fuerte sobre los Estados más débiles, donde muchas comunidades no soportan esta fuerza extra regional y finalmente muchas sucumben a la ambición extranjera, más aún, cuando las poblaciones no suelen contar con el apoyo de sus gobiernos ante su situación de vulnerabilidad, ya que el Estado ha traicionado a los pobres al tomar partido por los ricos, sean nacionales o extranjeros (Martínez, 2004).

Por tanto, no es extraño que “los movimientos ambientales del sur tiendan a la confrontación con el Estado oponiéndose a leyes y políticas que consideran destructivas e injustas, desconfiando de la mediación del Estado con los intereses extranjeros”¹⁴, porque generalmente sus reclamos son ignorados por la postura parcial e intransigente de las instancias oficiales.

Pero problematizando aún más la cuestión, en Colombia y otros lugares, la noción de movimiento social no es retomada con frecuencia, haciendo alusión más bien a la de “resistencia social”, entendida como una acción de carácter político que confronta a agresores externos y que para el caso, reclama la permanencia en el territorio de las comunidades.

Incluso, Galaffasi (2006) va mucho más allá con sus postulados, ya que señala como resulta un poco inconveniente ese continuismo teórico en el estudio de los movimientos sociales, particularmente por varios motivos. El primero, porque se ha vuelto un tanto incómodo para las organizaciones, que bajo el paraguas del estudio del movimiento social, muchos investigadores escudriñen en la comunidad más allá de lo permitido, violentando la confianza que las organizaciones han construido con algunos intelectuales.

Segundo, muchos de estos estudios sobre movimientos sociales son tan intrusivos, que los investigadores terminan revelando sin autorización alguna, la lógica interna de la organización comunitaria, poniendo en evidencia frente a empresarios y organismos represores del Estado, la estructura social de la resistencia, dejándolos abiertamente expuestos ante sus contradictores.

Tercero, resulta llamativo ese auge tan explosivo en el estudio de los movimientos sociales en áreas del Tercer Mundo, volcando la mirada sobre las organizaciones y su lógica interna, como si ello realmente tuviera alguna utilidad práctica real para el accionar comunitario. Han resultado poco útiles en campo los análisis tradicionales de este tipo, especialmente porque se anclan a

los estudios de escuelas norteamericanas, cuya tendencia es hacia la preservación del statu quo. Igualmente, se abastecen intelectualmente de las corrientes europeas, de donde surgen conceptos como “nuevos movimientos sociales”, los cuales no son necesariamente concordantes con la realidad actual y latinoamericana.

En general se cae en teorismo contemplativo y pasivo, sin proponerse nuevos rumbos de transformación social. Se ha abandonado por completo los referentes de la lucha de clases para el análisis, cayendo incluso en el señalamiento y la censura hacia las corrientes marxistas, resultando un tanto conservador los resultados de las observaciones, ya que se atenúa en exceso, las raíces y causas del conflicto.

Y Cuarto, Galaffasi hace una llamado de atención para que no se siga explorando a los movimientos sociales bajo esos paradigmas tradicionales. El autor argumenta que hoy resulta más estratégico profundizar en la estructura económica y política (que provoca la movilización social y agudiza la base de la contradicción), que seguir ahondando en los estudios de los movimientos sociales de la forma como se ha venido haciendo. Para eludir estas modas intelectuales, en este caso, se requiere de un estudio que apuntaría a develar el funcionamiento y estrategias de control territorial por parte de las empresas transnacionales.

Conclusiones

A pesar de todos los cuestionamientos, es innegable el protagonismo que ha tomado el estudio de los movimientos sociales, pero lo es más, el accionar de estos movimientos en la práctica real y concreta, un fenómeno cuya característica común para este caso, es la oposición a los megaproyectos mineros. Aquí, un punto muy importante, es cuando hay una difícil convergencia entre lo global y lo local, que corresponde a la contradicción entre empresas y comunidades, respectivamente¹⁵. En el caso de la minería, “muchas de las comunidades afectadas no aceptan el derecho de las empresas a penetrar en sus territorios, rechazan la minería como incompatible con su cultura, sus economías o tradiciones” (Farhan, 2000).

El inconformismo social por los efectos ambientales y sociales, potencializó en Argentina un reconocido movimiento nacional anti minería conocido como las UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), que en el 2006 aglutinó a diferentes comunidades de vecinos auto convocados de diferentes provincias. Esta experiencia alimentó y hasta posibilitó las reflexiones de los estudiosos del tema en Argentina, vinculando activamente a intelectuales que se unían a esta causa.

En Colombia se realimentó gradualmente el movimiento antiminero, mediante luchas y alianzas coordinadas de diferentes organizaciones regionales, que se han expresado contra los megaproyectos transnacionales. Las organizaciones con más experiencia, han liderado fuertemente este proceso de resistencia a nivel nacional.

Algunos consideran que movimientos de este tipo se pueden denominar como nuevos movimientos sociales, dada su reivindicación por lo ambiental, donde el ecologismo se constituye en parte gruesa de los argumentos que justifican el accionar y el pensar de esos movimientos, entendiendo que la minería es una de las actividades más contaminantes del planeta y degradadoras del territorio. Sin embargo, esa catalogación de “nuevos” movimientos todavía tiene que someterse a una fuerte discusión.

Lo que parece hacer falta dentro de los movimientos sociales y a los intelectuales que nos analizan, es un posicionamiento político más profundo, derivando en la exploración del papel de la ideología sobre la acción práctica. Es decir, todavía falta mucho camino por recorrer para descifrar un horizonte político hacia el cual se dirijan las organizaciones sociales, para que no se reduzca la resistencia a la simple reivindicación local, coyuntural y espontánea, sino que se cuestione el poder regional, nacional y transnacional.

Descubrir que hay una estructura global, un sistema económico y una armazón política de dominación, es tarea de las organizaciones y de los intelectuales cercanos a ellas. Para trascender del reclamo puntual, se requiere de una bandera ideológica sólida y basada en la experiencia histórica de otras luchas y cuerpos teóricos transformadores de la realidad.

Por lo pronto, hasta ahora es imparable la oleada transnacional experimentada en todo el escenario latinoamericano para el aprovechamiento de riquezas naturales, gracias al estímulo de la banca mundial y los Estados para atraer capitales extranjeros. Un proceso que significa la colonización transnacional en diferentes áreas de la economía, que además de la petrolera y minera, se encuentran también en el negocio de la energía eléctrica, el agua y el gas (entre muchos otros). Quedará la interrogante de hasta qué punto puede avanzar el gran capital en la consecución de sus intereses y hasta donde las comunidades organizadas se concientizarán y lograrán contrarrestar semejante situación.

Bibliografía

Centro de Investigación y Formación de los Movimientos sociales Latinoamericanos (2008). *Patagonia. Resistencias Sociales a la recolonización del continente*. Ediciones América libre. Buenos Aires, Argentina.

De Echave José, Hoetmer Raphael, Palacios Mario (2009). *Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*. Fondo editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lima.

Farhan Mauricio (2002). “Impactos de la minería”. *Socavando los Bosques. La necesidad de controlar a las empresas mineras transnacionales: un estudio de caso canadiense*. WMR. Montevideo, Uruguay.

Galafassi, Guido (2006). “Cuando el árbol no deja ver el bosque. Neofuncionalismo y posmodernidad en los estudios sobre movimientos sociales”. *Revista Theomai*. No 14. Buenos Aires, Argentina.

Martínez Esperanza (2004). *Minería: Repercusiones sociales y ambientales*. Universidad de Alicante, Departamento de Ecología. España.

Moody Roger (2000). "Minando el planeta. La industria minera canadiense y su influencia mundial". En: *La necesidad de controlar a las empresas mineras transnacionales: un estudio de caso canadiense*. WMR. Montevideo, Uruguay.

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales –WMR- (2000). *La necesidad de controlar a las empresas mineras transnacionales: un estudio de caso canadiense*. Programa para los Pueblos de los Bosques, Enlaces de los Pueblos Indígenas Filipinos. Montevideo, Uruguay.

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales –WMR- (2004). *Minería impactos Sociales y Ambientales*. Montevideo. Uruguay.

Nettleton Geoff (2000). "Tendencias mundiales de la minería y la función de las ganancias internacionales". En: *La necesidad de controlar a las empresas mineras transnacionales: un estudio de caso canadiense*. Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Montevideo, Uruguay.

Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos en Colombia (2008). *Las Huellas del capital transnacional en Colombia. Estudio de tres casos: Nestlé, Cerrejón LLC y British Petroleum*. Bogotá, Colombia.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambiental -Olca- (2005). *Violentos enfrentamientos en Huaraz*. <http://www.olca.cl>.

Rodríguez Pardo Javier (2010). *Vienen por el Oro vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después*. Editorial Ciccus. Buenos Aires, Argentina.

Svampa Maristella, Antonelli Mirta A. (editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial: Biblos. Buenos Aires, Argentina.

Wagner Lucrecia (2010). *Problemas ambientales y Conflicto social en Argentina. Movimientos socio ambientales en Mendoza. La defensa del agua y rechazo a la Mega minería en los inicios de siglo XXI*. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Quilmes. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Buenos Aires, Argentina.

Notas

1. Ver Rodríguez, 2009: 291.
2. Agosto Patricia, en Centro de Investigación, 2008: 17.
3. Rodríguez, 2008: 9
4. Ver Observatorio de Transnacionales, 2008: 285.
5. Ver Olca, 2005.
6. Ver Martínez, 2004: 85-89.

7. Olca, 2005.

8. Vale citar ejemplos de los lugares del mundo que ya prohibieron este tipo de minería, como: Turquía, desde el año 1997, Estado de Montana, Estados Unidos desde el año 1998, República Checa desde el año 2000, Nueva Gales del Sur, Australia, desde el año 2000, Ciudad Cotacachi, Ecuador, desde el año 2000, Ciudad Gunnison, Colorado, Estados Unidos; desde el año 2001, República de Costa Rica, desde el año 2002, Ciudad de Costilla, Colorado, Estados Unidos, desde el año 2002, República de Alemania, desde el año 2002, Provincia del Chubut, Argentina desde el año 2003, Ciudad de Summit, Colorado, Estados Unidos, desde Marzo de 2004, Provincia de Río Negro, Argentina, desde el año 2005.

9. Ver De Echave y otros, 2009:319 - 401.

10. Farhan, 2000: 31 en WMR. Ver también la obra del Centro de Investigación, 2008.

11. De ahí que las organizaciones reclamen y rescaten “el territorio” como núcleo de las consignas y la denuncia social. Ver Ver Svampa y Antonelli, 2009: 45 y ver Svampa, 2009: 38 en De Echave y otros.

12. Ver Svampa y Antonelli, 2009: 45.

13. Un cálculo realizado en el año 1996 fue que hasta el 90% de la producción de oro y alrededor del 60% de la de cobre, para el año 2020, procederán probablemente de territorios indígenas en todo el mundo” (Moody, 2000:16).

14. Guha, 2000 citado por Martinez, 2004: 263.

15. Ver Svampa, 2009: 33 y 42 en De Echave y otros.